



ATT. D. JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ
ALCALDE PRESIDENTE Y CONCEJAL DE RR.HH.
EXCMO. AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA: 20 de octubre de 2016
..REFERENCIA: MRQZ/MDRL
ASUNTO: Traslado acuerdo Junta de Personal

La Junta de Personal, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 6 de octubre de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

5. SOLICITUD DE AMPARO AL PLENO DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA POR PARTE DE LA FUNCIONARIA C.B.L. EN REPRESENTACIÓN DE L.B.C.

Se da cuenta del escrito con el siguiente tenor literal:

“SOLICITUD DE AMPARO AL PLENO DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

D^a C.B.L., con N.I.F. XXXXXXXX-K, domicilio a efectos de notificaciones en la Avda. Ricardo Soriano nº 4 – Edif. Zelim – Oficina 2 – primera planta, nº teléfono 952827786, en representación de L.B.C., funcionario del Ayuntamiento de Marbella en situación de jubilación,

EXPONE:

PRIMERO.- Que el art. 18, párrafo primero, del Acuerdo Socio-económico, denominado “ASISTENCIA JURÍDICA”, establece que «el Ayuntamiento se obliga a prestar asistencia jurídica todos sus funcionarios, en cualesquiera procedimientos judiciales, en el orden penal, civil o contable, que se les incoen, así como en las actuaciones que se promuevan en su contra, con carácter preliminar al procedimiento o en el ámbito policial o gubernativo, por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos, siempre que por tales actuaciones no se causan dolosamente daños o

perjuicio en los bienes y derechos del Ayuntamiento», así como que «en los supuestos anteriormente mencionados y mientras tanto el tribunal competente no emita su fallo, el Ayuntamiento se hará cargo de todos los gastos que se produzcan, incluso las fianzas que se soliciten».

Por su parte, el párrafo segundo del mismo artículo del Acuerdo Socio-económico dispone que, «a fin de garantizar la presunción de inocencia recogida en nuestra Constitución dicha asistencia jurídica se hará efectiva por medio de letrados y procuradores, en su caso, pudiendo utilizarse, previa opción del funcionario, los servicios propio de los profesionales de que disponga el Ayuntamiento en su plantilla o concertarse los servicios de profesionales del derecho libre». En relación con esto último, el inciso «en este caso se abonarán las minutas conforme a la escala de honorarios mínimos de los Colegios Profesionales de Málaga» debe tenerse por no puesto desde la entrada en vigor de la llamada Ley Ómnibus, tal y como se señala en el dictamen del Colegio de Abogados de Málaga que se adjunta al presente escrito.

SEGUNDO.- Pues bien: el funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, actualmente jubilado, D. L. B. C., y representado de la que suscribe, presentó minutas de abogado para su abono por parte del Ayuntamiento de Marbella, una vez que ha sido absuelto por Sentencia, de conformidad con lo establecido en el citado art. 18 del Acuerdo Socio-económico.

Que ha tenido conocimiento, de forma extraoficial, que dicho expediente se someterá a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento (órgano que entendemos incompetente), y que el importe de las ayudas se ha informado desfavorablemente, debido a que las cuantías de las minutas no se corresponden con el baremo de los Colegios Profesionales de Málaga; cuestión esta sobre la que procede señalar y puntualizar lo siguientes extremos:

- a) Que desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus los baremos de los Colegios Oficiales sólo pueden aplicarse, única y exclusivamente, a efectos de la tasación de costas (lo que no es el caso en cuestión), según dictamen del propio Colegio de Abogados de Málaga que se adjunta al presente escrito; por lo que la referencia del art. 18 del Acuerdo Socio-económico a los baremos colegiales debe tenerse por no puesta desde la entrada en vigor de la referida Ley Ómnibus.
- b) Que, según el mismo dictamen del Colegio de Abogados de Málaga que se adjunta al presente escrito, el importe de las minutas en cuestión resulta ajustado a la dificultad y complejidad del caso concreto.
- c) Que el Excmo. Ayuntamiento de Marbella carece «en su plantilla» de abogados penalistas, por lo que al interesado no le quedaba más solución que hacer uso del derecho a contratar los servicios de profesionales del derecho libre, en lugar del derecho a utilizar los servicios propios de los profesionales de que dispusiera el Ayuntamiento «en su plantilla» (art. 18 del Acuerdo Socio-económico).

TERCERO.- Que en el mismo expediente también se ha informado desfavorablemente la concesión de una ayuda por asistencia jurídica cuando en lugar de recaer Sentencia absolutoria recae Auto declarativo de prescripción. Esta denegación de la ayuda solicitada se basaría en una especie de principio de presunción de culpabilidad y, por tanto, vulneraría el derecho a la presunción de inocencia recogido en el art. 24 de la Constitución Española y al que también se refiere el propio art. 18 del Acuerdo Socio-económico.

CUARTO.- Que, igualmente, en el mismo expediente también se ha informado desfavorablemente la concesión de ayudas por asistencia jurídica referidas al pago de provisiones de fondos. Esta denegación también vulneraría el art. 18 del Acuerdo Socio-económico, ya que este se refiere expresamente no sólo a los casos en que ya haya recaído Sentencia, sino también a que «mientras tanto el tribunal competente no emita su fallo, el Ayuntamiento se hará cargo de todos los gastos que se produzcan, incluso las fianzas que se soliciten».

QUINTO.- Que no se ha dado cumplimiento al trámite de audiencia al interesado previsto en el art. 84 de la Ley 30/1992.

Por todo ello, a los miembros de la Junta de Personal,

SOLICITO INFORMAR FAVORABLEMENTE

PRIMERO.- Que por parte del Ayuntamiento de Marbella se abone el 100% de las minutas de los abogados presentadas ante el Ayuntamiento por la asistencia jurídica a mi representado, D. L. B. C., habiéndose fallado la absolución total del mismo, de conformidad con lo previsto en el art. 18 del Acuerdo Socio-económico, de conformidad con el dictamen del Colegio de Abogados de Málaga que se adjunta al presente escrito.

SEGUNDO.- Que se respete la aplicación del art. 18 del Acuerdo Socio-económico cuando recaiga no sólo Sentencia absolutoria, sino también Auto declarativo de prescripción; ello de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia recogido en el art. 24 de la Constitución Española y al que también se refiere el propio art. 18 del Acuerdo Socio-económico.

TERCERO.- Que por parte del Ayuntamiento de Marbella se abone la cantidad solicitada en concepto de provisión de fondos para otros procedimientos judiciales en los que mi representado, funcionario jubilado del Ayuntamiento de Marbella, D. L. B. C., se encuentra incurso por el ejercicio de sus funciones, por así preverlo también el tan citado art. 18 del Acuerdo Socio-económico.

CUARTO.- Que se dé cumplimiento a lo establecido en el art. 84 de la LRJPAC y por parte del Ayuntamiento se nos ponga de manifiesto el expediente, de forma inmediatamente anterior a la redacción de la propuesta de resolución.

En Marbella, a 31 de agosto de 2016

Fdo.: C. B. L.”.

Y la Junta de Personal, acuerda por **UNANIMIDAD** de los miembros presentes:

Aprobar el amparo anteriormente transcrito.

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos, salvo los términos que resulten de la aprobación de la presente acta en la siguiente sesión que se celebre.

EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Manuel del Río León